TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

OFICIO: 1553/2025
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa **PRA/01/2023/SRC-IX**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ
DOMICILIO OFICIAL

En los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa **PRA/01/2023/SRC-IX,** se dictó un acuerdo, mismo que a la letra dice:

XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ; A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO.

VISTO el estado procesal con el que da cuenta el Secretario de Acuerdos de esta Sala Regional Unitaria Centro, se advierte que en fecha **diez de diciembre de dos mil veinticuatro** se dictó **sentencia**, misma que fue notificada a la presunta responsable y a la autoridad investigadora los días **once** y **doce de diciembre de dos mil veinticuatro,** respectivamente, tal como consta del instructivo de notificación y de la notificación por comparecencia visibles a fojas "seiscientos sesenta y ocho" a "seiscientos setenta" de autos, así como a la denunciante el día **once de abril de dos mil veinticinco**, tal como consta del acuse de recibo visible a foja "seiscientos setenta y siete" de autos, sin que a la fecha ninguna de las partes haya impugnado la sentencia de marras, habiendo transcurrido en exceso el término legal para ello; consecuentemente, en apego a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, **se declara que dicha sentencia QUEDA FIRME** para todos sus efectos legales.

Recibí con copia certificada de la Sentencia: 28/Agosto/2025

En consecuencia, debe precisarse que la sentencia de fecha **diez de diciembre de dos mil veinticuatro** resolvió:

> *"**PRIMERO.** Se **declara la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad administrativa** a cargo de Jovita Cortés Guzmán con base en las razones expuestas en esta sentencia.*
>
> ***SEGUNDO.** Se **impone a la persona responsable la sanción administrativa y la indemnización** descritas en el considerando sexto de esta sentencia."*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 PRESIDENCIA

De igual forma, cabe resaltar lo dispuesto en el considerando **sexto** de dicho fallo, mismo que en lo medular versa:

"[…]

En esas condiciones, esta Sala Regional impone a Jovita Cortés Guzmán una sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas por el plazo de diez años, el cual es el plazo mínimo establecido en el artículo 78 último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los casos en los que el monto de afectación excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como en este asunto ocurrió.

Además, conforme con lo dispuesto en el artículo 79 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se determina a cargo de Jovita Cortés Guzmán el pago de una indemnización a la Hacienda Pública municipal por el monto del daño causado, esto es, de $202,997.00 (doscientos dos mil novecientos noventa y siete pesos con cero centavos, moneda nacional) […].”

SE REQUIERE ACATAMIENTO A LA SENTENCIA. Por tanto, dado el sentido de la sentencia y en ejercicio de las facultades de ejecución conferidas a esta Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz y artículo 225 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se ordena **dar vista** con copia certificada de la sentencia a las autoridades siguientes:

- Al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlilapan, Veracruz, **como superior jerárquico** de la responsable Jovita Cortés Guzmán, derivado de su desempeño como Síndica única Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlilapan, Veracruz.
- A la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 209 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, **se requiere** al **Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlilapan, Veracruz,** como superior jerárquico de la responsable **Jovita Cortés Guzmán**, derivado de su desempeño como Síndica Única Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlilapan, Veracruz, para que dentro del término de **DIEZ DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día hábil siguiente al cual surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe la ejecución de la sentencia

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

de fecha diez de diciembre de dos mil veinticuatro dictada en el expediente PRA/01/2023/SRC-IX, **apercibida** que, en caso de no hacerlo en el plazo concedido, se hará acreedora a una multa de CIEN UMAS vigente para el año dos mil veinticinco, equivalente a $11,314.00 (once mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.), considerando que la UMA actual asciende a $113.14 (ciento trece pesos 14/100 M.N.), ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De igual forma, por cuanto hace a la **Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se requiere** para el efecto de que, una vez cubierta la sanción económica por parte de la responsable, deberá informarlo a esta Sala, lo anterior en términos de los artículos 54 y 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz y 225 último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Finalmente, continuando con el estado procesal que guarda el expediente al rubro citado, se advierte que, mediante auto de fecha **diecinueve de marzo de dos mil veinticinco** se reservó realizar pronunciamiento respecto al escrito signado por la Licenciada **Leticia Mequixtle Cuatra**, **Titular del Área de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas del órgano Interno de Control del Municipio de Tlilapan**, **Veracruz**, en su carácter de **autoridad investigadora,** ocurso mediante el cual solicita se decrete que la sentencia definitiva dictada en el presente asunto ha causado estado y se inicie el periodo de ejecución de sentencia, por lo tanto, toda vez que, el estado procesal de autos lo permite, se procede a su acuerdo, ante lo cual se informa que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, se autoriza a las personas actuarias adscritas a la Sala Regional Unitaria Centro, así como a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Regional Unitaria Centro de este Tribunal, para que realicen las notificaciones y diligencias correspondientes en el presente juicio, tanto dentro como fuera del recinto judicial acorde con lo dispuesto por el artículo 38 fracciones III, VII y XII, así como 41 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA RESPONSABLE, POR OFICIO AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN,

VERACRUZ, A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Y PUBLÍQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL. Así lo proveyó y firma Jaziel Cabrera Pacheco, Magistrado de la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, ante Ramiro Esqueda Bautista, Secretario de Acuerdos que autoriza y firma. **DOY FE.**

----------FIRMAS Y RUBRICAS. ----------

Lo anterior para que surtan los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
A 21 DE AGOSTO DE 2025.

RAMIRO ESQUEDA BAUTISTA
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: PRA/1/2023/SRC-IX

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA INVOLUCRADA: Jovita Cortés Guzmán

AUTORIDAD INVESTIGADORA: Titular de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control del Municipio de Tlilapan, Veracruz

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: Titular de Substanciación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control del Municipio de Tlilapan, Veracruz

MAGISTRADO: Jaziel Cabrera Pacheco

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: Lilian Marisol Domínguez Gómez

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO

Sentencia definitiva en la que se resuelve declarar la **existencia de la falta administrativa** atribuida a la presunta responsable.

RESULTANDOS

Antecedentes del caso

I. Etapa de investigación

I.1. El diez de octubre de dos mil veintidós la tesorera del Ayuntamiento de Tlilapan, Veracruz, hizo del conocimiento de la contralora municipal hechos atribuidos a Jovita Cortés Guzmán[1], síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan, Veracruz.

Tales hechos consistían, en términos generales, en que la síndica única supuestamente omitía atender los requerimientos que le realizaban la tesorera en conjunto con el presidente municipal para que entregara a la tesorera la firma electrónica del Municipio a fin de poder realizar el pago

[1] En adelante "la presunta responsable".

de los impuestos correspondientes, así como la facturación, timbrado de nómina y demás trámites, lo cual habría generado un perjuicio al servicio público municipal.

I.2. Derivado de lo anterior, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós la titular de Investigación de Responsabilidades Administrativas[2] del Órgano Interno de Control del Municipio de Tlilapan inició la investigación número MTLI/OIC/PA/02/2022 y realizó las diligencias de investigación que consideró pertinentes desde esa fecha y hasta el cinco de diciembre de dos mil veintidós.

I.3. El siete de diciembre de dos mil veintidós la autoridad investigadora emitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa[3] en el que sostuvo, en síntesis, que la presunta responsable habría incurrido en la falta administrativa grave de abuso de funciones al presuntamente haber omitido la entrega de la firma electrónica o "*efirma*" a la Tesorería Municipal, lo que habría provocado que el Municipio no cumpliera con sus obligaciones fiscales.

II. Etapa de procedimiento

II.1. El quince de diciembre de dos mil veintidós la titular del área de Substanciación del Órgano Interno de Control[4] del Ayuntamiento de Tlilapan emitió el Acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa[5] y dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa número MTLI/OIC/SUB/PRA/02/2022, además, ordenó emplazar a la presunta responsable para que compareciera de manera personal a la audiencia inicial.

Así, el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós fue emplazada la presunta responsable[6] a la audiencia que sería llevada a cabo el nueve de enero de dos mil veintitrés, sin embargo, dicha audiencia fue diferida debido a que la presunta responsable interpuso un recurso de

---

[2] En adelante "la autoridad investigadora".
[3] *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 134 a 157.
[4] En adelante "la autoridad substanciadora".
[5] *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 160 a 162.
[6] Según instructivo de notificación consultable en el *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 164 a 157.

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

revocación en contra de la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

El recurso interpuesto fue desechado el doce de enero de dos mil veintitrés, por lo que fue señalada una nueva fecha para la audiencia inicial, respecto de la cual la presunta responsable fue emplazada[7] el dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

II.2. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés fue llevada a cabo la audiencia inicial[8] de la presunta responsable, quien compareció y manifestó que era su deseo defenderse personalmente, pero que aceptaba una persona defensora, por lo que fue designada la licenciada en Derecho Georgina Mendoza Ruiz como defensora de la presunta responsable.

En dicha audiencia la presunta responsable rindió su declaración[9] por escrito, realizó las manifestaciones que estimó pertinentes y ofreció las pruebas de su defensa.

Por su parte, la autoridad investigadora ratificó el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en todas sus partes, incluidas las pruebas mencionadas en ese documento. A su vez, la tesorera municipal ratificó el escrito del diez de octubre de dos mil veintidós y presentó un nuevo escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés en el que detalló los recargos y actualizaciones del Impuesto sobre la Renta.

II.3. El uno de febrero de dos mil veintitrés la presunta responsable interpuso un segundo recurso de revocación, esta vez en contra de diversos acuerdos dictados en la audiencia inicial llevada a cabo el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.

Ese recurso fue desechado el siete de febrero de dos mil veintitrés.

III. Recepción del expediente por parte del Tribunal

---

[7] Según instructivo de notificación consultable en el *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 240 a 242.
[8] *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 252 a 263.
[9] Misma fuente, hojas 268 a 270.

III.1. El dos de marzo de dos mil veintitrés la autoridad substanciadora remitió el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa MTLI/OIC/SUB/PRA/02/2022 a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, el cual fue recibido y radicado por la Sala Regional Unitaria Centro inicialmente con el número de expediente PRA/1/2023/SRC-II, actualmente PRA/1/2023/SRC-IX.

La Sala Regional Unitaria Centro notificó a las partes del Procedimiento sobre la recepción del expediente[10], en cuya contra la presunta responsable interpuso un tercer recurso de revocación el once de mayo de dos mil veintitrés, recurso que fue desechado por improcedente mediante acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.

III.2. En relación con las pruebas ofrecidas en la audiencia inicial, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés fueron admitidas las pruebas aportadas por la autoridad investigadora y por la presunta responsable.

III.3. En la misma fecha fue declarado abierto el periodo de alegatos, los cuales fueron expuestos por escrito en las fechas siguientes: la presunta responsable[11] el veintiuno de agosto, la autoridad investigadora[12] el ocho de junio y la autoridad substanciadora[13] el ocho de junio, todos de dos mil veintitrés, aunque respecto de la autoridad substanciadora fue acordado que no surtirían efectos dado que no tiene el carácter de parte en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

III.4. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés esta Sala Regional declaró cerrada la instrucción del procedimiento y ordenó turnar el expediente para resolver una vez que fueran realizadas las notificaciones correspondientes, no obstante, el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés se consideró necesario solicitar al Congreso del Estado de Veracruz una declaración de procedencia respecto de la presunta responsable, ya que se trata de una edil electa para un periodo de cuatro años comprendidos del dos mil veintidós al dos mil veinticinco

---

[10] Según oficio 521 dirigido a la presunta responsable y el acuse del Servicio Postal Mexicano, así como las comparecencias del trece y catorce de abril de dos mil veintitrés consultables en *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 343 a 351.

[11] *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX,* hojas 392 a 394.

[12] Misma fuente, hojas 402 a 406.

[13] Misma fuente, hojas 396 a 400.

que desempeña una función pública protegida constitucionalmente, es decir, que su separación, en su caso, sólo puede ocurrir por renuncia o causa grave calificada por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente.

Sin embargo, mediante oficio número DSJ/LXVI/583/2024[14] del ocho de enero de dos mil veinticuatro la directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz manifestó la imposibilidad jurídica de atender la petición.

III.5. El cinco de julio de dos mil veinticuatro fue ordenado turnar el expediente para su resolución una vez que fuera notificado el acuerdo de esa fecha, expediente que fue estudiado en el plazo razonable que permitió la carga de trabajo que recae en esta Sala Regional Unitaria Centro con motivo de la cantidad importante de asuntos que fueron distribuidos y asignados en este órgano jurisdiccional y que pueden ser consultados en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario setenta y seis del veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

No obstante, la sentencia no pudo ser emitida dado que el veinte de noviembre de dos mil veinticuatro la autoridad investigadora hizo del conocimiento de esta Sala Regional que el monto total actualizado y devengado por el Ayuntamiento de Tlilapan en concepto de actualización y recargos del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal dos mil veintidós fue de $202,997.00 (doscientos dos mil novecientos noventa y siete pesos con cero centavos, moneda nacional) y anexó las pruebas correspondientes.

Por ello, mediante acuerdo del veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro fue ordenado dar vista a la presunta responsable con los documentos exhibidos por la autoridad investigadora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, lo cual realizó de manera extemporánea por lo que el seis de diciembre de dos mil veinticuatro se le tuvo por perdido ese derecho.

---

[14] Misma fuente, hojas 457 y 458.

Finalmente, en esa misma fecha fue ordenado turnar el asunto para su resolución, la cual se emite en los términos expuestos en este documento.

CONSIDERANDOS

I. Competencia

La Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz es competente para conocer y resolver este procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción VI, primer, segundo, tercer y cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, primer, segundo y tercer párrafo, 5, 8, inciso A), fracción III, 23, primer párrafo, 23 Bis, fracción II, 24, fracción VI y antepenúltimo y penúltimo párrafos y 34, fracciones II y XXII de la Ley número 367 Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

II. Procedencia

El procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve es procedente debido a que la falta atribuida en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la persona presunta responsable es una de las consideradas como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de que no se advierte la existencia de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 196 y 197 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, se analiza enseguida el planteamiento de incompetencia expresado por la presunta responsable en su declaración del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.

A. Incompetencia en razón de la materia

En su declaración escrita la presunta responsable dijo interponer un incidente de incompetencia en razón de materia porque en su

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

consideración las autoridades del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlilapan no cuentan con facultades para la investigación o sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa calificada como grave, ya que de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas son las competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.

Además, señaló que las personas servidoras públicas del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlilapan son incompetentes para investigar y sustanciar un procedimiento de responsabilidad administrativa a un edil integrante del Cabildo, el cual otorgó el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control, pues el edil es un superior jerárquico, por lo que deben declararse incompetentes puesto que vulneran los derechos humanos de la presunta responsable, así como el derecho de votar y ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo.

En principio, es necesario aclarar que la incompetencia de las autoridades se encuentra prevista en el artículo 196 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como una causa de improcedencia, no como una cuestión incidental. Por ello, el planteamiento realizado se aborda como una causa de improcedencia.

Aclarado lo anterior, debe decirse que el planteamiento es **infundado**. Es así porque la presunta responsable interpreta erróneamente lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual debe leerse en conjunto con lo previsto en los artículos 9 y 10 que en la parte que interesa establecen:

> Artículo 9. **En el ámbito de su competencia**, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:
>
> I. Las Secretarías;
>
> II. Los Órganos internos de control;
>
> III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas.
>
> ...

> Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, **la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas**.
>
> ...
>
> Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para **investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves**.
>
> En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.
>
> ...

El énfasis es añadido.

Tales preceptos establecen que cada una de las autoridades mencionadas en el artículo 9 son competentes para aplicar la Ley, lo cual realizarán en el ámbito de su competencia.

Es precisamente la porción "ámbito de su competencia" lo que revela que tanto los Órganos Internos de Control como las entidades de fiscalización superior están facultados para investigar y sustanciar las faltas administrativas de las que conozcan en el ejercicio de sus funciones, es decir, la facultad que poseen unos no excluye la de los otros siempre que ésta se ejerza en el ámbito de su competencia.

Ahora, ese ámbito de competencia se encuentra determinado en términos generales en los artículos 10 y 11 de la Ley analizada en donde está previsto que los Órganos Internos de Control tienen a su cargo la investigación y substanciación de las faltas administrativas, respecto de las cuales la Ley no distingue si únicamente de las calificadas como no graves o de las calificadas como graves, de manera que no cabe hacer una distinción que la Ley no contempla, sino entender que se encuentran facultados tanto de unas como de otras.

En cambio, las entidades de fiscalización superior solamente se encuentran facultadas para investigar y substanciar el procedimiento respecto de faltas administrativas graves, lo cual no significa que únicamente dichas entidades deban conocer de dichas faltas con exclusión de las diversas autoridades, sino que, a diferencia de los Órganos Internos de Control, las entidades de fiscalización superior solamente pueden investigar y sustanciar las faltas administrativas graves que conozcan en ejercicio de sus funciones.

Así entendido, es claro que el Órgano Interno de Control del Municipio de Tlilapan sí tiene competencia para investigar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves.

Por otra parte, es igualmente **infundado** lo alegado en relación con que las personas servidoras públicas del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlilapan son incompetentes para investigar y sustanciar un procedimiento de responsabilidad administrativa a la edil integrante del Cabildo porque es una superiora jerárquica y se vulneraría su derecho de votar y ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo.

Es así porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las personas servidoras públicas pueden incurrir en distintas responsabilidades frente al Estado: responsabilidad política, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y responsabilidad civil.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, de modo que la persona servidora pública es susceptible de ser sancionada en diferentes vías. Este criterio se encuentra contenido en la tesis de rubro y texto siguientes:

> **RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.** De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.[15]

Acorde con lo establecido en el texto constitucional y lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las personas servidoras públicas podrán ser sujetas de responsabilidad administrativa, civil y penal, pero solamente cierta categoría de personas servidoras públicas pueden ser sujetas de responsabilidad política.

A nivel local, podrán ser sujetas de responsabilidad política las personas servidoras públicas establecidas en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Veracruz: las y los diputados, la gobernadora o el gobernador, las y los secretarios de despacho, la o el contralor general, la o el fiscal general, las y los magistrados, presidentes municipales o de Concejos Municipales, **las y los síndicos**, la o el contralor general del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa, las y los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y las y los titulares o sus equivalentes de las entidades de la administración pública estatal y municipal.

No obstante, la circunstancia de que solo ciertas categorías de personas servidoras públicas puedan ser sujetas de responsabilidad política no implica que únicamente pueda atribuírseles ese tipo de responsabilidad,

---

[15] Registro digital 200154, Tesis P. LX/96, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, t. III, abril de 1996, p. 128.

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

ni que no sea posible determinarles otro tipo de responsabilidad, ni sujetarles a los diversos procedimientos distintos al juicio político.

A propósito de lo anterior, al resolver el amparo en revisión 280/2009 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que:

- Fue voluntad del constituyente de señalar quiénes son los altos servidores públicos que pueden ser sometidos a juicio político, esto es, que se les puede fincar responsabilidad política, pero esto con independencia de que también pueden ser sujetos de otro procedimiento, sea penal, civil o administrativo.

  Lo anterior porque la intención de la Norma Fundamental no es proteger a esos servidores para que exclusivamente se les juzgue políticamente, por el contrario, es que esos altos servidores públicos también puedan ser juzgados políticamente, con independencia de las otras responsabilidades.

- Con base en la autonomía de los procedimientos de responsabilidades, cada autoridad competente dependiendo de su materia puede implementar el procedimiento respectivo.

- Si derivado de las investigaciones relativas a los actos u omisiones del servidor público se decida no sujetarlo a juicio político, eso no impide en modo alguno que la autoridad competente para imponer sanciones administrativas instaure el procedimiento correspondiente.

  Lo anterior porque, con independencia de que se trate de funcionarios contenidos en el artículo 110 como sujetos a probable juicio político, hay que tener presente en todo momento las disposiciones generales que consideran servidor público a todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración pública, los cuales deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, pues en caso contrario administrativamente serán sancionados con suspensión, destitución e inhabilitación, así como económicamente.

- Si la conducta del servidor público se estima debe ser sancionada administrativamente es posible iniciar un procedimiento administrativo.

- La circunstancia de que el servidor público ocupe o haya ocupado un cargo de los que refiere el artículo 110 como sujetos a posible juicio político no impide que se le sancione administrativamente, porque los procedimientos administrativos se instruyen siempre para fincar responsabilidad administrativa por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores deben observar en el desempeño de sus funciones.

- A pesar de la jerarquía de un funcionario, puede estar sujeto a un procedimiento administrativo por el incumplimiento de sus obligaciones tendentes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia de sus funciones, aun cuando el cargo que el servidor público ocupe o haya ocupado pueda también dar lugar a la instauración de un juicio político por haber incurrido en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Estas consideraciones motivaron la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

> **SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PUEDEN SER SANCIONADOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO IV DE LA LEY SUPREMA.** Las reformas al Título Cuarto de la Constitución General de la República y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que lo reglamenta, tuvieron por objeto destacar como esencia de la función de los servidores públicos servir a la colectividad y sujetar ese servicio a los intereses superiores de ésta, como son trabajar por los intereses públicos fundamentales y por el buen despacho de éstos y no cometer violaciones graves a la Ley Suprema, pues en caso de hacerlo se prevén procedimientos de responsabilidad autónomos, el civil, penal, administrativo y político, este último, a través del juicio político que nace como consecuencia de actos que lesionan gravemente instituciones políticas del país, independientemente de que constituyan algún delito o de que el actuar del funcionario pueda

> motivar una sanción administrativa. Sobre esta base, se concluye que independientemente de que el artículo 110 de la Carta Magna mencione a ciertos servidores públicos como probables sujetos de juicio político por sus actos u omisiones, su responsabilidad puede analizarse a través de los procedimientos destacados, porque aunado a su autonomía, en términos del artículo 108 del Ordenamiento Supremo, para efectos de las responsabilidades por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, se consideran servidores públicos, entre otros, a los funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, concepto que evidentemente abarca a todos los funcionarios a los que puede instaurarse juicio político, independientemente de su jerarquía, y del empleo, cargo o comisión que ocupen o hubieren ocupado.[16]

Derivado de lo anterior importa destacar que si, como en el caso concreto, lo que se pretende es determinar la posible responsabilidad administrativa de una persona servidora pública es a la autoridad administrativa a quien compete hacerlo, con independencia de que por la conducta atribuida la persona pueda ser sujeta también a otros procedimientos de responsabilidad de distinta naturaleza.

En ese orden queda claro que la presunta responsable, aun cuando se desempeña como síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan y es una edil del Cabildo, puede ser sujeta de la investigación y del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las autoridades del Órgano Interno de Control del Municipio, así como de esta Sala Regional Unitaria Centro, las cuales son las autoridades competentes para investigar, sustanciar y, en su caso, determinar responsabilidades e imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves.

III. Fijación clara y precisa de los hechos controvertidos

En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa la autoridad investigadora atribuyó a la presunta responsable la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones en los términos siguientes:

---

[16] Registro digital 166791, Tesis 2a. LXXIV/2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXX, julio de 2009, p. 470.

- La presunta responsable habría incurrido en abuso de funciones conforme con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por omitir la entrega de la Firma Electrónica o *efirma* a la Tesorería Municipal, ya que la presunta responsable era la única persona a quien la Ley le confería tener en su poder la firma mencionada que otorga el Servicio de Administración Tributaria, pues ella era la representante legal del Ayuntamiento.

- Que lo anterior provocó que el Municipio no cumpliera con sus obligaciones fiscales y generó que no se hayan enterado a las autoridades fiscales los pagos de impuestos, además del surgimiento de conceptos que el Municipio debe erogar por la falta de cumplimiento como son multas, recargos y actualizaciones del periodo comprendido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la que la síndica entregó a la Tesorería Municipal la Firma Electrónica o *efirma*.

- En el oficio mediante el cual entregó la Firma Electrónica la síndica no justificó la omisión en la que habría incurrido, ni se encontró fundada ni motivada de acuerdo con los preceptos legales.

- Existía una probable responsabilidad administrativa calificada como grave en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que la presunta responsable habría presuntamente incurrido en abuso de funciones por realizar omisiones arbitrarias con las que habría ocasionado un perjuicio al servicio público y obstaculizado el cumplimiento de obligaciones fiscales del Municipio, así como provocado un probable daño patrimonial a la Hacienda pública municipal.

Además, en sus alegatos expresó, en síntesis, que:

- Durante el periodo de investigación solicitó a la presunta responsable información respecto del resguardo de la firma electrónica, a lo que la presunta responsable respondió que ella la mantenía bajo su resguardo y que no la entregaba a la Tesorería Municipal porque no le generaba confianza su uso.

- Con lo anterior la presunta responsable impidió la realización de las funciones de la Tesorería Municipal y obstaculizó el entero de las obligaciones fiscales del Ayuntamiento.

En relación con los hechos atribuidos, la presunta responsable manifestó en su declaración y en sus alegatos, en síntesis, que:

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

- El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa carece de toda lógica jurídica y viola el contenido de los artículos 7, 9, 10, 11, 90, 94 y 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 3, 4, 7, 8, 16 y 17 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, así como los artículos 1, 2, 17, 18, 27 fracción I, 28, 35 fracciones XII, XX, XXI, XLI, 37 fracciones III, V, VII, XIII, 39, 40 fracción I, 44 fracciones II, III, IV, VIII, 45 fracciones I, II, III, IX, 67, 72 fracciones I, VIII, IX, XV, XXVII, 73 Quater, 73 Sexies, 73 septies, 73 decies fracciones III, XIII y XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como sus derechos de acceder al debido proceso, ya que la autoridad investigadora en ningún momento tomó en consideración el cúmulo de documentos que presentó ante el presidente municipal, la tesorera, el director de Obras municipal y la titular de la Contraloría Interna, los cuales fueron aportados como prueba en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con número de expediente TEV-JDC-594/2022 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, por las violaciones e irregularidades cometidas en su contra por la tesorera municipal y otros servidores públicos respecto a la firma electrónica y el cumplimiento de obligaciones fiscales del Ayuntamiento de Tlilapan.

- Dichas situaciones fueron hechas del conocimiento de la Contraloría Interna mediante la denuncia que presentó.

- La tesorera municipal en ningún momento dio cumplimiento o respetó el contenido de los artículos 37 fracción II, 45 fracción I, 72 fracciones XX, XVII y 115 fracciones VIII, IX, XIV, XVI, XXIX, XXX de la Ley Orgánica del Municipio Libre al negarse en todo momento a acudir a la oficina de la Sindicatura a realizar las actividades en las que necesitaba la firma electrónica del Ayuntamiento, lo que obligó a la presunta responsable a entregar la firma electrónica en noviembre de dos mil veintidós con la finalidad de evitar perjuicio a la Hacienda Pública municipal por las acciones dolosas de la Tesorería, las cuales fueron observadas e ignoradas por la Contraloría Interna.

Con base en lo señalado en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y en lo manifestado por la presunta responsable se tienen como hechos reconocidos por las partes:

- Que la presunta responsable es la síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan, Veracruz.

- Que la presunta responsable tenía bajo su resguardo la Firma Electrónica Avanzada o *"efirma"* expedida por el Servicio de Administración Tributaria al Municipio de Tlilapan.

- Que la presunta responsable entregó la firma electrónica a la Tesorera Municipal el treinta de noviembre de dos mil veintidós.

Por el contrario, los hechos controvertidos radican en los siguientes:

1) Si la presunta responsable debía entregar a la Tesorería la Firma Electrónica Avanzada a la Tesorería Municipal para la realización de sus funciones o si, por el contrario, la tesorera municipal debía atender las citas de la presunta responsable para realizar las actividades que requerían la firma electrónica mencionada.

2) Si la negativa de la presunta responsable de entregar la firma electrónica a la Tesorería Municipal se encontró justificada en las atribuciones que tenía conferidas.

IV. Valoración de las pruebas y relatoría de hechos probados

En atención a los hechos controvertidos lo que debe esclarecerse es si la presunta responsable se encontraba obligada a entregar la Firma Electrónica Avanzada a la Tesorería Municipal y, en su caso, si la negativa de entregarla se encontró justificada. Por ello, la valoración de las pruebas se orientará a esclarecer tales puntos.

Para demostrar los hechos la autoridad investigadora aportó cuarenta documentales públicas, las cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, solo respecto de la autenticidad o veracidad de los hechos a los que se refieren. En consecuencia, se precisan a continuación solamente los hechos relevantes a los que se refieren y que se consideran demostrados.

1. En el mes de marzo de dos mil veintidós la tesorera municipal de Tlilapan solicitó a la presunta responsable, en su carácter de síndica única, que le hiciera llegar la firma electrónica del municipio para poder realizar el pago de impuestos

correspondientes, así como la facturación, timbrado de nómina y demás trámites en los que se requería.

De dicha situación informó también a las y los ediles municipales.

En concreto, estas comunicaciones fueron realizadas mediante los escritos siguientes:

Fecha	Destinatario	Asunto
24 de marzo de 2022	Síndica única	Solicitud de entrega de la firma electrónica
25 de marzo de 2022	Ediles municipales	Informar que a la fecha no se había podido realizar el entero del Impuesto sobre la Renta retención de sueldos y salarios de enero y febrero debido a que la síndica única no había hecho entrega de la firma electrónica
30 de marzo de 2022	Ediles municipales	Informar que, como consecuencia de que no fue enterado el Impuesto sobre la Renta retenido, el Municipio dejó de recibir la participación federal Impuesto sobre la Renta participable

Estos hechos están demostrados con las copias certificadas de los escritos mencionados[17] que muestran las comunicaciones realizadas por la tesorera municipal en relación con la solicitud de entrega de la Firma Electrónica Avanzada del Municipio y las consecuencias que hasta esa fecha se habían generado derivado de la falta de entrega de la firma electrónica.

2. Es cierto que la presunta responsable citó a la tesorera municipal para que acudiera a las oficinas de la Sindicatura para realizar las actividades que requerían la Firma Electrónica Avanzada del Municipio y que la tesorera municipal se negó a ello, sin embargo, la negativa de la tesorera obedeció a que la presunta responsable pedía que las actividades fueran llevadas a cabo en el área de la

---

[17] *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX*, hojas 14 a 16.

Sindicatura, en un horario determinado y por medio de una tercera persona.

Este hecho se encuentra demostrado a partir de los medios de prueba siguientes:

i. Con la copia certificada del oficio número OF/08/2022[18] del once de abril de dos mil veintidós mediante el cual la presunta responsable comunicó a la tesorera municipal que le había sido complicado realizar el trámite de firma electrónica, pero que una vez realizado y desde hacía aproximadamente dos meses su contador Rafael Breniz Estrada, quien era una persona de su entera confianza, había estado en contacto con la tesorera para que por medio de él se llevara a cabo el timbrado respectivo, lo correspondiente al Impuesto sobre la Renta, retención de sueldos y salarios de enero, febrero y marzo de dos mil veintidós y demás responsabilidades, pero que había sido la tesorera quien no había brindado la colaboración correspondiente, por lo que le solicitó que a la brevedad colaborara con su contador para cumplir con las normas fiscales.

ii. Con las copias certificadas de los oficios OA/03/2022 y OA/05/2022[19] del veintidós y del veintisiete de abril de dos mil veintidós con los que la presunta responsable le solicitó a la tesorera municipal que se presentara en la oficina de la Sindicatura a las diez horas *post meridiem* (PM o después del mediodía) para realizar el timbrado correspondiente.

iii. Con la copia certificada del escrito del veintinueve de abril de dos mil veintidós[20] firmado por la tesorera en respuesta a las comunicaciones anteriores, en el que expresó a la presunta responsable, fundamentalmente, que:

   a. Correspondía a la Tesorería la programación y realización de pagos a terceros, acreedores y proveedores, así como dirigir las labores de timbrado de nóminas, pago de impuestos federales, facturación para los contribuyentes y

---

[18] Misma fuente, hoja 19.
[19] Misma fuente, hojas 20 y 21.
[20] Misma fuente, hojas 17 y 18.

ejercicio de los recursos públicos, además de proponer el nombramiento de los empleados de la Tesorería.

b. Era responsabilidad de la Tesorería proporcionar los informes que el Ayuntamiento o los ediles le solicitaran para que pudieran llevar a cabo sus atribuciones de vigilancia.

c. Le solicitaba que se reservara el enviarle citas sin fundamento legal para presentarse en la Sindicatura a altas horas de la noche para ejercer actividades que solo correspondía atender a la Tesorería Municipal, así como que permitiera que fuera ella como tesorera quien determinara los horarios laborales y las actividades que se llevaban a cabo en ese departamento, ajustarse a la agenda programada y al espacio físico definido para la Tesorería.

d. Se abstenía de laborar con la persona Rafael Breniz Estrada porque era una persona ajena a la plantilla de personal del Municipio y porque desconocía su experiencia laboral en el ámbito municipal, por lo que consideró que la presunta responsable quería imponerle a dicha persona con abuso de autoridad.

e. Le solicitaba nuevamente que le proporcionara la Firma Electrónica Avanzada del Municipio y se comprometía a hacerse responsable del uso y manejo, así como de entregar los informes necesarios cuando la presunta responsable los solicitara para poder llevar a cabo sus atribuciones de vigilancia.

f. Consideraba la actitud de la presunta responsable como un abuso y discriminación hacia su trabajo, hacia su persona y hacia otras compañeras.

iv. Con la copia certificada del oficio OA/09/2022 del cuatro de mayo de dos mil veintidós[21] emitido en contestación a la tesorera, en el que la presunta responsable le informó que había sido un error la hora en la que fue citada y que la hora correcta eran las diez *ante meridiem* (AM o antes del mediodía).

---

[21] Misma fuente, hoja 22.

Por otro lado, le informó que no había discriminado a su persona ni a ninguna otra.

v. Con la copia certificada del oficio OA/10/2022 del cuatro de mayo de dos mil veintidós[22] con el que la presunta responsable solicitó por cuarta ocasión a la tesorera municipal que se presentara en la oficina de la Sindicatura a las once horas *ante meridiem* (AM o antes del mediodía) para realizar el timbrado correspondiente.

vi. Con la copia certificada del escrito del cinco de mayo de dos mil veintidós[23] mediante el cual la tesorera municipal respondió a la presunta responsable que:

   a. Le solicitaba que le indicara el fundamento legal de sus citas en las que se atribuyó el dirigir las labores del timbrado de nómina y para que la tesorera laborara en la oficina de la Sindicatura.
   b. Le recordaba que la Sindicatura solo tenía atribuciones de vigilancia y de gestoría.
   c. La reiteraba que corresponde a la Tesorería la programación y realización de pagos a terceros, acreedores o proveedores; dirigir las labores de timbrado de nómina, el pago de impuestos federales y estatales, así como la facturación para los contribuyentes y ejercer los recursos públicos; proponer el nombramiento de los empleados de la Tesorería y proporcionar los informes que el Ayuntamiento o los ediles solicitaran para llevar a cabo sus atribuciones de vigilancia.
   d. Le comunicaba que estaba rebasando sus atribuciones y que el citarla y querer realizar las actividades propias de la Tesorería constituía discriminación hacia su trabajo y hostigamiento laboral.
   e. Le solicitaba que se sujetara a las atribuciones que la Ley le otorgaba y le proporcionara las herramientas necesarias para que la Tesorería pudiera llevar a cabo sus atribuciones.

---

[22] Misma fuente, hoja 27.
[23] Misma fuente, hojas 25 y 26.

Ahora, no se inadvierten las manifestaciones de la presunta responsable en sus alegatos relativas a que con la negativa de atender sus requerimientos la tesorera municipal habría incumplido con lo dispuesto en los artículos 37 fracción II[24], 45 fracción I[25], 72 fracciones XX, XVII[26] y 115 fracciones VIII, IX, XIV, XVI, XXIX, XXX[27] de la Ley Orgánica del Municipio Libre, sin embargo, se considera que dichas manifestaciones deben desestimarse dado que este Procedimiento de Responsabilidad Administrativa se enfoca en determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad de la presunta responsable, no así de la tesorera municipal, lo que en su caso podrá ser materia de un diverso procedimiento.

Por su parte, en lo que respecta a la presunta responsable, debe decirse que ninguno de los fundamentos referidos en sus alegatos fundamentan el hecho de que haya requerido a la tesorera municipal que acudiera a las oficinas de la Sindicatura para realizar las actividades que requerían la Firma Electrónica Avanzada del Municipio, en un horario determinado y por medio de una tercera persona.

---

[24] Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:
II. Representar legalmente al Ayuntamiento.

[25] Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y un Regidor y tendrá las atribuciones siguientes:
I. Inspeccionar las labores de la Tesorería y dar cuenta al Ayuntamiento de todo aquello que estime pertinente.

[26] Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo titular deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, y tendrá las atribuciones siguientes:
XVII. Proponer el nombramiento o remoción de los servidores públicos y empleados a sus órdenes.
XX. Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté autorizado conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones presupuestales aplicables.

[27] Artículo 115. Los servidores públicos municipales deberán:
VIII. Sujetar sus actos y procedimientos administrativos a lo previsto por esta ley y el Código de la materia.
IX. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
XIV. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de su desempeño.
XVI. Observar respeto y subordinación legítima con sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten u ordenen en el ejercicio de sus atribuciones.
XXIX. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, sin perjuicio de sus derechos laborales, según disponga la ley de la materia.
XXX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

3. El cinco de mayo de dos mil veintidós la tesorera municipal hizo del conocimiento de la presunta responsable que la cuenta documentada, soportes de los estados financieros de enero, febrero y marzo estaba disponible para su revisión y firma de órdenes de pago y demás documentación en la oficina de la Tesorería Municipal, por lo que le solicitaba que le indicara el día y hora en que acudiría a esa oficina para agendar su visita y tener el espacio disponible.

Este hecho fue demostrado con la copia certificada del escrito del cinco de mayo de dos mil veintidós[28].

4. Mediante diversos escritos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós la tesorera municipal remitió a la presunta responsable las hojas de trabajo de la retención del Impuesto sobre la Renta de enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintidós para que a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria fueran generadas las líneas de captura para el entero del Impuesto, ya que para ello era necesaria la Firma Electrónica Avanzada del Municipio, la cual se encontraba bajo resguardo de la presunta responsable.

Este hecho fue probado con las copias certificadas de los escritos[29] de la fecha mencionada.

5. La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación detectó que el Municipio no había presentado la declaración del entero mensual del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios y asimilados de enero, febrero y marzo de dos mil veintidós, por lo que invitó al Municipio al cumplimiento de dichas obligaciones fiscales.

   En consecuencia, la tesorera municipal remitió la invitación de la Subsecretaría de Ingresos a la presunta responsable y le informó que para generar la línea de captura era necesaria la Firma Electrónica Avanzada del Municipio que estaba bajo resguardo de

---

[28] *Expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX*, hoja 24.
[29] Misma fuente, hojas 28 a 31.

la presunta responsable, motivo por el cual ya le había enviado las hojas de trabajo para que ingresara la firma electrónica, generara la línea de captura y la Tesorería pudiera dar cumplimiento a las obligaciones generadas.

Estos hechos fueron probados con las copias certificadas del oficio SI/1036/2022[30] del veintitrés de mayo de dos mil veintidós y del escrito del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós[31].

6. Mediante un escrito del veinte de junio de dos mil veintidós la tesorera municipal remitió a la presunta responsable las hojas de trabajo de la retención del Impuesto sobre la Renta de mayo de dos mil veintidós para que a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria fuera generada la línea de captura para el entero del Impuesto, ya que para ello era necesaria la Firma Electrónica Avanzada del Municipio, la cual se encontraba bajo resguardo de la presunta responsable.

Este hecho fue probado con la copia certificada del escrito[32] de la fecha mencionada.

7. Mediante un escrito del veinte de junio de dos mil veintidós la tesorera municipal solicitó al secretario del Ayuntamiento llevar a cabo una sesión de Cabildo para acordar sobre la delegación, uso y en su caso responsabilidad legal sobre la Firma Electrónica Avanzada expedida por el Servicio de Administración Tributaria y para tratar asuntos relacionados con el buzón tributario, usos de la firma electrónica, omisión de entero del Impuesto sobre la Renta de enero a mayo, restricción del sello digital, Impuesto sobre la Renta participable y opinión en vía de cumplimiento.

   Dicha sesión fue llevada a cabo el veintidós de junio de dos mil veintidós según consta en la lista de asistencia certificada por el secretario del Ayuntamiento, en cuyo orden del día fue propuesto al Cabildo que se delegaran poderes al presidente municipal para

---

[30] Misma fuente, hojas 33 y 34.
[31] Misma fuente, hoja 32.
[32] Misma fuente, hoja 35.

que compareciera ante el Servicio de Administración Tributaria a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que tenía el Municipio con la Federación, propuesta que fue votada en contra por el regidor único y la síndica única, quienes manifestaron:

> "En uso de la voz el Regidor único dice que su voto en contra es por ser respetuoso de los derechos de la sindico y como parte de la comisión de hacienda cree conveniente que la firma electrónica permanezca en resguardo de la representante legal. En uso de la voz la sindico único manifiesta que es contra su voto dado que es su derecho el tener temas de vigilancia por ser parte de comisión de hacienda."

Este hecho fue probado con la copia certificada del escrito[33] de la fecha mencionada, así como del acta y la lista de asistencia de la sesión de Cabildo[34] referida.

8. La Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación hizo del conocimiento del presidente municipal de Tlilapan las inconsistencias que fueron detectadas, entre ellas, la no presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de enero a mayo y el no timbrado de la nómina, así como que al no haber solventado esas observaciones el Servicio de Administración Tributaria contaba con las facultades para compensar con cargo a las participaciones federales municipales cualquier tipo de adeudo, incluido accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del Impuesto sobre la Renta, por lo que instó al Municipio a atender dicha situación de manera prioritaria.

   En consecuencia, conjuntamente el presidente y la tesorera municipales remitieron copia simple del oficio anterior a la presunta responsable y le solicitaron que entregara la Firma Electrónica Avanzada del Municipio a la Presidencia o a la Tesorería para solventar las inconsistencias y evitar cargos en las participaciones federales.

---

[33] Misma fuente, hoja 49.
[34] Misma fuente, hojas 125 a 130.

Estos hechos fueron probados con las copias certificadas del oficio DGVyCH/1692/2022[35] del uno de julio de dos mil veintidós y del escrito del cuatro de agosto de dos mil veintidós[36].

9. Mediante un escrito del cuatro de agosto de dos mil veintidós la tesorera municipal informó a los ediles del Ayuntamiento de Tlilapan que requería los instrumentos para poder entrar al portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y saber qué se adeudaba o qué existía pendiente de pago y así estar en condiciones de cumplir con las obligaciones fiscales pendientes, además de exhortarles a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

Este hecho fue probado con la copia certificada del escrito[37] de la fecha mencionada.

10. Mediante un escrito del once de agosto de dos mil veintidós la tesorera municipal remitió a la presunta responsable las hojas de trabajo de la retención del Impuesto sobre la Renta de junio de dos mil veintidós para que a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria fuera generada la línea de captura para el entero del Impuesto, ya que para ello era necesaria la Firma Electrónica Avanzada del Municipio, la cual se encontraba bajo resguardo de la presunta responsable.

Este hecho fue probado con la copia certificada del escrito[38] de la fecha mencionada.

11. En agosto de dos mil veintidós la presunta responsable solicitó a la tesorera municipal por novena ocasión que se presentara en la oficina de Sindicatura para realizar bajo su supervisión el timbrado de la nómina de enero a agosto de dos mil veintidós.

    En respuesta, la tesorera municipal le informó que consideraba acoso laboral, hostigamiento laboral y abuso de autoridad hacia

---

[35] Misma fuente, hojas 39 y 40.
[36] Misma fuente, hoja 38.
[37] Misma fuente, hojas 41 a 54.
[38] Misma fuente, hoja 55.

su persona las múltiples citas de la presunta responsable, ya que la Tesorería contaba con un área determinada para llevar a cabo las labores propias del departamento sin necesidad de acudir a otra área.

Además, le solicitó que le facilitara la Firma Electrónica Avanzada del Municipio para que pudiera ejercer sus actividades y obligaciones en horarios laborales y en ajuste a la agenda y diligencias propias de la Tesorería.

Estos hechos fueron probados con las copias certificadas del oficio LUN/05/01/09/SIN/2022[39] del cinco de agosto de dos mil veintidós y del escrito del siete de septiembre de dos mil veintidós[40].

12. La Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación hizo del conocimiento del presidente municipal de Tlilapan que el Municipio no había cumplido con remitir el comprobante fiscal digital por internet por concepto de liquidación y pago de las participaciones federales entregadas por el Estado, por lo que le solicitó que instruyera a quien correspondiera a fin de que fueran elaborados y remitidos.

    En consecuencia, la tesorera municipal remitió el oficio anterior a la presunta responsable y le solicitó que cumpliera con la obligación requerida puesto que ella tenía bajo su resguardo la Firma Electrónica Avanzada del Municipio.

Estos hechos fueron probados con las copias certificadas del oficio TES-VER/SOF/DCJ/3411/2022[41] del veintinueve de junio de dos mil veintidós y del escrito del trece de septiembre de dos mil veintidós[42].

13. Al diez de noviembre de dos mil veintidós la presunta responsable todavía mantenía bajo su resguardo la Firma Electrónica Avanzada del Municipio, pues informó que no la había entregado porque no le generaba confianza su uso, pero que si

---

[39] Misma fuente, hojas 58 y 59.
[40] Misma fuente, hoja 57.
[41] Misma fuente, hojas 61 y 62.
[42] Misma fuente, hoja 60.

se le proporcionaba la información que ella había requerido se encontraría en la mejor disposición de facilitar lo requerido.

Además, informó que la Ley Orgánica del Municipio Libre la facultaba como representante legal del Ayuntamiento a mantener bajo su resguardo la firma electrónica, así como que era la persona encargada de saber los movimientos y uso adecuado de dicha firma.

Reconoció que había recibido solicitudes para entregar la firma electrónica, pero que ella había remitido solicitudes a la Tesorería para que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 fracciones XV, XXII y XXIII[43] se le informara sobre el listado de la plantilla laboral, ingresos y egresos realizados por ese departamento y que la respuesta había sido negativa.

Además, informó que hacía valer sus derechos como representante legal del Municipio e integrante de la Comisión de Hacienda Municipal contenidos en el artículo 45 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X[44] de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

---

[43] Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo titular deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, y tendrá las atribuciones siguientes:
XV. Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de los Ediles le solicite.
XXII. Abstenerse de entregar documento original alguno que pertenezca al archivo de la oficina, salvo acuerdo expreso del Ayuntamiento.
XXIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos.

[44] Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y un Regidor y tendrá las atribuciones siguientes
I. Inspeccionar las labores de la Tesorería y dar cuenta al Ayuntamiento de todo aquello que estime pertinente;
II. Vigilar que la recaudación en todos los ramos que forman la Hacienda Municipal se haga con la eficacia debida y con apego a la Ley y que la distribución de los productos sea conforme a las partidas del presupuesto de egresos respectivo;
III. Revisar y firmar los cortes de caja mensuales de la Tesorería Municipal;
IV. Formular los proyectos anuales de ingresos y egresos, así como de la plantilla de personal, para que sean presentados al Ayuntamiento en su oportunidad, de conformidad con lo establecido por esta ley y demás disposiciones aplicables;
V. Revisar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual que deba rendir la Tesorería y presentarlos al Ayuntamiento con las observaciones que juzgue convenientes;
VI. Vigilar la debida actualización del inventario de los bienes y derechos del Municipio;
VII. Vigilar que las adquisiciones y transmisión de bienes o derechos municipales se realicen en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
VIII. Proponer la práctica de auditorías;
IX. Promover lo conducente al mejoramiento de la Hacienda y el Patrimonio Municipal; y

También informó que no existía negativa de su persona y que se encontraba en la mejor disposición de otorgar la manipulación de la firma electrónica ante el personal que le generara confianza y bajo estricta vigilancia, con lo que se le otorgaría certeza jurídica de los trabajos a realizar.

Lo anterior quedó demostrado con el original del escrito sin fecha[45] suscrito por la presunta responsable y dirigido a la autoridad investigadora.

14. El catorce de noviembre de dos mil veintidós la presunta responsable solicitó a la tesorera municipal que preparara la oficina de la Tesorería para el quince de noviembre de dos mil veintidós para recibirla a ella y "personas diversas" que acudirían en su compañía y bajo su responsabilidad para realizar los movimientos fiscales y contables pendientes con la firma electrónica.

    Manifestó bajo protesta de decir verdad que las personas diversas que acudirían con ella no recibían remuneración económica del Ayuntamiento.

    En respuesta a dicha solicitud, la tesorera municipal contestó que era su responsabilidad realizar movimientos contables y fiscales, así como autorizar al personal para llevar a cabo actividades propias de la Tesorería, por lo que no estaba en condiciones de cumplir con lo solicitado puesto que iría en contra de lo dispuesto en el artículo 72 fracciones I, II y XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

    También derivado de la solicitud que la presunta responsable realizó a la tesorera, el catorce de noviembre de dos mil veintidós la titular del Órgano Interno de Control informó a ambas personas, así como al presidente municipal, que la tesorera se encontraba imposibilitada para delegar responsabilidades a personal ajeno a

---

X. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.

[45] Misma fuente, hojas 86 a 88.

la administración municipal, por lo que solicitaba su intervención para que las áreas se coordinaran y actuaran conforme con las atribuciones que la Ley les confería.

Estos hechos fueron probados con las copias certificadas del oficio 01/LUNES/14/11/SIND/2022[46], del escrito del catorce de noviembre de dos mil veintidós[47] y del oficio TLI-OIC/091/2022[48].

15. El treinta de noviembre de dos mil veintidós la presunta responsable entregó a la tesorera municipal la firma electrónica del Municipio.

Este hecho fue probado con las copias certificadas del oficio MTV/SIND/002-NOV/2022[49] y del escrito[50] de esa fecha suscrito por la tesorera municipal.

16. El uno de diciembre de dos mil veintidós la tesorera municipal informó a la autoridad investigadora que los montos adeudados en concepto de obligaciones fiscales hasta ese momento eran los siguientes:

Concepto	Monto	Observaciones
Impuesto sobre la Renta por retención de sueldos	$637,771.96	Retención de sueldos y salarios por el periodo de enero-octubre
Monto pendiente de timbrar enero-octubre	$4,995,747.75	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Monto pendiente de facturar	$24,051,849.65	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

[46] Misma fuente, hoja 107.
[47] Misma fuente, hojas 114 y 115.
[48] Misma fuente, hojas 108 a 110.
[49] Misma fuente, hoja 118.
[50] Misma fuente, hojas 121 a 124.

Así también, informó que los montos en concepto de recargos y demás accesorios generados por la omisión en el entero por la retención del Impuesto sobre la Renta a los sueldos y salarios se generaban y calculaban hasta el día en el que fuera generada la línea de captura para el pago, por lo que en ese momento no estaba en condición de darle esa información.

Este hecho fue probado con el original del escrito[51] mencionado.

17. La presunta responsable promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de actos, entre otros, relacionados con el uso de la firma electrónica del Municipio y el supuesto actuar parcial de la Contralora Interna del Ayuntamiento al haber iniciado una investigación administrativa en su contra, pero haber omitido iniciarla respecto de diversas personas servidoras públicas.

    Dicho juicio fue radicado con el número de expediente TEV-JDC-594/2022 y resuelto el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, resolución en la que se determinó sobreseer respecto de lo señalado en torno a la utilización de la firma electrónica del Municipio al considerar esencialmente que sus inconformidades de la parte accionante no versan sobre actos de naturaleza electoral y, por tanto, no buscan la protección de sus derechos político-electorales de ejercer su cargo.

    En cuanto al supuesto actuar parcial de la Contralora Interna las inconformidades de la aquí presunta responsable fueron calificadas como infundadas al considerar que derivaban de un procedimiento de responsabilidad administrativa que es autónomo y que cuenta con sus propios medios de defensa, que determinar sobre quién o quiénes debe investigar el Órgano Interno de Control municipal excedía la competencia formal y material del Tribunal Electoral y que el hecho de que se haya instaurado un procedimiento en materia de responsabilidad administrativa en su contra no era razón suficiente para concluir que el asunto debiera enmarcarse en la materia electoral.

---

[51] Misma fuente, hoja 80.

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

Estos hechos se consideran probados a partir de las copias simples[52] exhibidas por la presunta responsable de la cédula de notificación del veintidós de noviembre de dos mil veintidós y del acuerdo de esa misma fecha, así como de la versión pública[53] de la resolución emitida en dicho juicio publicada en la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz, la cual fue consultada por esta Sala Regional como un hecho notorio.

18. El quince de noviembre de dos mil veinticuatro la tesorera municipal informó a la autoridad investigadora que ya se habían realizado los pagos en concepto de Impuesto sobre la Renta, Retenciones por salarios del ejercicio dos mil veintidós, así como que la suma de los accesorios generados por el atraso en los enteros de dicho impuesto se conformaba de la siguiente manera:

Concepto	Monto
Parte actualizada	$43,562.00
Recargos	$159,435.00
Total	$202,997.00

Este hecho se considera demostrado con el original del oficio TES/ISR-RESP-2022/1124/01[54].

19. La presunta responsable, como síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan, es representante legal e integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal según lo dispuesto en los artículos 37 fracción II[55] y 45 primer párrafo[56] de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

De las atribuciones con que cuenta destacan, en lo que interesa, las siguientes:

> Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:
> II. Representar legalmente al Ayuntamiento.

---

[52] Misma fuente, hojas 282 y 283.
[53] Consultable en https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2023/MAR/23/TEV-JDC-594-2022%20SENTENCIA.pdf
[54] Misma fuente, hojas 517 a 634.
[55] Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:
II. Representar legalmente al Ayuntamiento.
[56] Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y un Regidor y tendrá las atribuciones siguientes…

III. **Vigilar las labores de la Tesorería** y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones de éste.

IV. **Vigilar** que, con oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado.

VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación relativa.

VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia.

Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y un Regidor y tendrá las atribuciones siguientes:

I. **Inspeccionar las labores de la Tesorería** y dar cuenta al Ayuntamiento de todo aquello que estime pertinente;

II. **Vigilar** que la recaudación en todos los ramos que forman la Hacienda Municipal se haga con la eficacia debida y con apego a la Ley y que la distribución de los productos sea conforme a las partidas del presupuesto de egresos respectivo;

III. **Revisar y firmar** los cortes de caja mensuales de la Tesorería Municipal;

IV. Formular los proyectos anuales de ingresos y egresos, así como de la plantilla de personal, para que sean presentados al Ayuntamiento en su oportunidad, de conformidad con lo establecido por esta ley y demás disposiciones aplicables;

V. **Revisar** los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual que deba rendir la Tesorería y presentarlos al Ayuntamiento con las observaciones que juzgue convenientes;

VI. Vigilar la debida actualización del inventario de los bienes y derechos del Municipio;

VII. Vigilar que las adquisiciones y transmisión de bienes o derechos municipales se realicen en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;

VIII. Proponer la práctica de auditorías;

> IX. Promover lo conducente al mejoramiento de la Hacienda y el Patrimonio Municipal; y
>
> X. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.

El énfasis es añadido.

Con base en lo anterior, se concluye que entre sus atribuciones no se encuentra la de realizar por sí misma las funciones de la Tesorería Municipal contenidas en el artículo 72 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio Libre consistentes en recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales y los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de ingresos, así como dirigir las labores de la Tesorería y hacer que los empleados cumplan con sus deberes, sino que a la síndica única como representante legal e integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal solamente le corresponde vigilar, inspeccionar y revisar dichas labores.

V. Consideraciones lógico jurídicas sobre la existencia o inexistencia de las faltas administrativas

Una vez valoradas las pruebas la Sala Regional Unitaria Centro concluye la existencia de la falta administrativa atribuida a la presunta responsable de acuerdo con los razonamientos que se exponen enseguida.

En principio, conviene precisar que la falta administrativa atribuida a la presunta responsable consiste en el abuso de funciones, la cual se encuentra prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en los términos siguientes:

> Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Específicamente, la autoridad investigadora atribuyó la existencia de dicha falta en la primera hipótesis, es decir, en el abuso de funciones configurado por ejercer atribuciones que no se tengan conferidas o valiéndose de las que se tengan, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Así, para determinar la existencia o inexistencia de la falta grave señalada es necesario identificar los elementos que la componen.

En primer lugar, se requiere que la persona servidora pública ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga.

En segundo lugar, que ese ejercicio de atribuciones sea para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios.

En tercer lugar, que lo anterior haya generado un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52[57] de la Ley o causado un perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Entonces, lo que está sujeto a prueba es que:

1) La persona señalada como presunta responsable haya ejercido atribuciones que no tuviera conferidas o se haya valido de las que sí tuviera.
2) Que el ejercicio de esas atribuciones haya sido para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios.
3) Que lo anterior le haya generado un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52[58] de la Ley o que haya causado perjuicio a alguna persona o al servicio público.

---

[57] Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…

[58] Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios;

La demostración de estos hechos corresponde a la autoridad investigadora, pues en ella recae la carga de la prueba según se dispuso en el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que a la letra establece:

> Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.

Al respecto, se tiene presente que el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé el Principio de Presunción de Inocencia no solo como regla de trato y como regla probatoria, sino también como estándar probatorio, lo que implica la absolución de las personas presuntas responsables cuando durante el procedimiento no se han aportado pruebas de cargo suficientes. En estos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia de rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES."[59]

Esta vertiente del principio de presunción de inocencia se manifiesta en el precepto legal citado en la porción "*hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad*", lo que se traduce en que se requiere un grado particularmente alto de confirmación probatoria de la culpabilidad, que se aproxima a la certeza, dado que solo admite la

---

empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…

[59] Registro digital 2006590, Tesis P./J. 43/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 7, t. I, junio de 2014, p. 41.

presencia de dudas "irrazonables" con la evidente intención de reducir al mínimo el riesgo de condena de un inocente.[60]

Esa fue la intención de las y los legisladores, pues en el proceso legislativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se dijo lo siguiente:

> "[…]el legislador debe tener en cuenta, que existe un mayor consenso entre la sociedad, de considerar más repugnante condenar erróneamente a un inocente, que dejar sin sanción alguna a un culpable. Es por ello que, en aquellos procesos jurisdiccionales donde el Estado puede ejercer su facultad punitiva, se ha optado por presumir la inocencia de quien es acusado, establecer la carga de la prueba en contra de quien acusa, dar al acusado el beneficio de la duda, así como exigir un estándar de prueba más elevado para que el juez declare la responsabilidad de una persona e imponga una condena. Cuando tales criterios se incorporan en el diseño de las reglas jurídicas que habrán de aplicarse a un proceso jurisdiccional, se produce el efecto de distribuir los posibles errores en el dictado de una sentencia a favor de los auténticamente inocentes."

En ese contexto, la Sala Regional Unitaria Centro considera que sí fue demostrado que la presunta responsable incurrió en la falta administrativa, pues la autoridad investigadora sí aportó evidencia que sustenta los elementos que componen el abuso de funciones.

En efecto, con las manifestaciones de la autoridad investigadora y de la presunta responsable, así como de las pruebas aportadas en este procedimiento fue demostrado:

1) Que la persona señalada como presunta responsable haya ejercido atribuciones que no tuviera conferidas o se haya valido de las que sí tuviera.

Fue así porque, conforme con lo descrito en los hechos trece y diecinueve de esta sentencia, la presunta responsable tenía atribuciones de representación legal del Municipio y de vigilancia, inspección y

---

[60] Se acudió a Taruffo, M. (2010). *Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos* (249). Madrid: Marcial Pons.

revisión de las labores de la Tesorería y fue en ejercicio de esas atribuciones que realizó las acciones materia de este procedimiento.

2) Que el ejercicio de esas atribuciones haya sido para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios.

Fue así porque, conforme con lo descrito en los hechos dos, siete, once, trece y catorce de esta sentencia, la presunta responsable ejerció las atribuciones que tenía conferidas como representante legal del Ayuntamiento e integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para realizar los siguientes actos:

- Negarse a entregar la Firma Electrónica Avanzada del Municipio a la Tesorería Municipal pese a las solicitudes que le fueron realizadas.
- Citar a la tesorera municipal para que acudiera a las oficinas de la Sindicatura a realizar las actividades propias de la Tesorería que requerían el uso de la firma electrónica.
- Solicitar a la tesorera municipal que preparara la oficina de la Tesorería para que ella (la presunta responsable) realizara los movimientos fiscales y contables pendientes con la firma electrónica.

Además, conforme con lo descrito en los hechos dos y catorce de esta sentencia, la presunta responsable ejerció sus atribuciones para inducir lo siguiente:

- Que la tesorera municipal colaborara con el contador de confianza de la presunta responsable, quien era una persona ajena al Municipio, para realizar actividades propias de la Tesorería del Ayuntamiento.
- Que la tesorera municipal recibiera y permitiera que personas diversas ajenas al Ayuntamiento, en compañía de la presunta responsable, realizaran los movimientos fiscales y contables pendientes con la firma electrónica.

Estos actos fueron arbitrarios en la medida en la que carecieron de un sustento legal, por el contrario, su sustento fue la desconfianza de la presunta responsable sobre el uso de la firma electrónica, así como respecto del personal que la utilizaría tal como lo manifestó en el escrito sin fecha referido en el hecho trece de esta sentencia, sin embargo, la

desconfianza no constituye una hipótesis legalmente prevista que justifique haber realizado o inducido los actos recién mencionados, pues si la presunta responsable tenía incertidumbre respecto de su uso podía haber ejercido sus facultades de vigilancia e inspección de las labores de la Tesorería.

3) Que lo anterior le haya generado un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52[61] de la Ley o que haya causado perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Los actos realizados por la presunta responsable implicaron un perjuicio al servicio público en tanto que ocasionaron que el Municipio incumpliera en tiempo y forma diversas obligaciones fiscales, tanto que, conforme con lo descrito en los hechos cinco, ocho y doce de esta sentencia, el Municipio tuvo que ser requerido en múltiples ocasiones por autoridades estatales diversas para cumplir dichas obligaciones, así como para remitir comprobantes específicos que resultaban necesarios para el Gobierno del Estado.

Además, el incumplimiento de las obligaciones fiscales produjo cargos en concepto de actualizaciones y recargos tal como fue descrito en los hechos dieciséis y dieciocho de esta sentencia, los cuales tuvieron que ser pagados con cargo a los recursos del Municipio e implicaron una lesión económica que el Municipio no tuvo que haber resentido de haberse evitado los actos que les dieron origen, por lo que a juicio de esta Sala Regional los actos de la presunta responsable causaron un daño patrimonial a la Hacienda Pública municipal por el monto de $202,997.00 (doscientos dos mil novecientos noventa y siete pesos con cero centavos, moneda nacional).

No pasan inadvertidas las manifestaciones de la presunta responsable en el sentido de que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de

---

[61] Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…

Control del Municipio respecto de presuntas irregularidades y violaciones cometidas en su contra por la tesorera municipal y otras personas servidoras públicas respecto a la firma electrónica y el cumplimiento de obligaciones fiscales, sin embargo, estas manifestaciones no contradicen lo que fue demostrado en este procedimiento.

Es así porque con ellas no justifica la legalidad de su actuar, sino que realiza señalamientos respecto de otras personas que son, en su caso, materia de otro procedimiento en el que ella como denunciante tendrá que activar los medios establecidos en la Ley para inconformarse de las acciones u omisiones de las autoridades encargadas de la investigación, substanciación y resolución.

Así también, lo dicho en torno a que promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por los mismos actos tampoco desvirtúa lo probado por la autoridad investigadora en este Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, ni impide la emisión de esta sentencia, ya que se trata de vías y materias distintas y autónomas que se ocupan de cuestiones diferentes tal como en su momento le fue explicado por el Tribunal Electoral de Veracruz según lo descrito en el hecho diecisiete de esta sentencia.

En consecuencia, dado que fueron acreditados los elementos de la falta administrativa atribuida debe declararse la existencia de responsabilidad administrativa a cargo de la presunta responsable.

VI. Imposición de sanción

Derivado de lo expuesto hasta este punto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 y 80 fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz procede imponer la sanción administrativa a la persona responsable, la cual se impone en consideración de las siguientes circunstancias:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones: de acuerdo con lo descrito en el hecho dieciocho de esta sentencia el daño causado asciende a $202,997.00 (doscientos dos mil novecientos noventa y siete pesos con cero centavos, moneda nacional),

el cual es el monto en concepto de actualizaciones y recargos que tuvo que ser pagado por el Municipio derivado del incumplimiento de obligaciones fiscales.

Dicho monto excede el valor de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil veintidós cuando ocurrieron los hechos, la cual ascendía a $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional).

II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio: la persona responsable es síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan y en dicho cargo ostenta un nivel jerárquico alto, pues tal como se observa de lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre ejerce atribuciones de representación legal, vigilancia, inspección, revisión, entre otras que muestran que cuenta con poder de mando y poder de decisión.

En cuanto a la antigüedad en el servicio, la persona responsable ejerce el cargo desde el uno de enero de dos mil veintidós conforme con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, ya que fue electa en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 según consta en el listado publicado por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Gaceta Oficial del Estado de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y número extraordinario quinientos dieciséis.

Lo anterior implica que cuando ocurrieron los hechos la persona responsable no contaba con antigüedad en el ejercicio de ese cargo, sino que recién acababa de tomar posesión, circunstancia que para esta Sala Regional podría revelar que la falta administrativa a sancionar se haya cometido debido a la inexperiencia en el desempeño de las atribuciones del cargo y no a una pretensión de la persona responsable de causar una afectación o perjuicio al servicio público.

III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público: a partir de lo observado en la página electrónica *https://transparencia.tlilapan.gob.mx/f/93*, la persona responsable cuenta con estudios de nivel licenciatura, pues cuenta con una

Ingeniería, por lo que se asume que posee conocimientos propios del nivel superior.

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución: a partir de lo demostrado en este procedimiento se considera que la persona responsable llevó a cabo la conducta en el entendido de que actuaba con apego a sus atribuciones, es decir, para esta Sala Regional la actuación de la persona responsable no fue dolosa.

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones: de acuerdo con lo observado en la página electrónica *https://transparencia.tlilapan.gob.mx/f/93*, la persona responsable no cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente.

VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable: no fue demostrado que la persona responsable haya obtenido un beneficio.

En esas condiciones, esta Sala Regional impone a Jovita Cortés Guzmán una sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el plazo de diez años, el cual es el plazo mínimo establecido en el artículo 78 último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los casos en los que el monto de afectación excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como en este asunto ocurrió.

Además, conforme con lo dispuesto en el artículo 79 segundo párrafo[62] de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se determina a cargo de Jovita Cortés Guzmán el pago de una indemnización a la Hacienda Pública municipal por el monto del daño causado, esto es, de $202,997.00 (doscientos dos mil novecientos noventa y siete pesos con

---

[62] El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.

cero centavos, moneda nacional), ya que dicho monto corresponde a la cantidad que el Municipio debió pagar en concepto de actualizaciones y recargos por el incumplimiento a las obligaciones fiscales derivado de la falta administrativa cometida por la persona responsable.

Una vez que haya causado ejecutoria esta sentencia deberá procederse en términos de lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para su cumplimiento.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se **declara la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad administrativa** a cargo de Jovita Cortés Guzmán con base en las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO. Se **impone a la persona responsable la sanción administrativa y la indemnización** descritas en el considerando sexto de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA A LA PERSONA RESPONSABLE, ASÍ COMO A LA DENUNCIANTE Y A LAS AUTORIDADES INVESTIGADORA Y SUBSTANCIADORA. PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN JURISDICCIONAL. Así lo resolvió y firmó Jaziel Cabrera Pacheco, magistrado de la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz ante Ramiro Esqueda Bautista, secretario de Acuerdos, quien autoriza y firma. **DOY FE.**

JAZIEL CABRERA PACHECO
Magistrado

RAMIRO ESQUEDA BAUTISTA
Secretario de Acuerdos

Estas firmas corresponden a la sentencia de la Sala Regional Unitaria Centro emitida el diez de diciembre de dos mil veinticuatro en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/1/2023/SRC-IX.

TRIJAEV
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

En diez de diciembre de dos mil veinticuatro turno esta sentencia a los actuarios de este Tribunal para su notificación. **CONSTE.**

Secretario de Acuerdos

RAZÓN. En diez de diciembre de dos mil veinticuatro, siendo las catorce horas con treinta minutos se publica esta sentencia en el boletín jurisdiccional bajo el número que le corresponda. **DOY FE.**

Secretario de Acuerdos

QUIEN SUSCRIBE, LORENA CORTÉS MORALES, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ

CERTIFICO:

QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS CONSISTENTES EN 22 FOJAS ÚTILES, COINCIDEN FIEL Y EXACTAMENTE CON LA SENTENCIA DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, MISMAS QUE OBRAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NÚMERO PRA/01/2023/SRC-IX DEL ÍNDICE DE ESTA SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN XALAPA, VERACRUZ, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. **DOY FE**.

TRIJAEV
SALA
CENTRO

LORENA CORTÉS MORALES
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ